



La suscrita Secretaria Técnica del Comité de Conciliación

CERTIFICA

Que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Municipio, por medio de Acta No. 21 del 1 de julio de 2021, se reunió para analizar la demanda promovida por MAPFRE SEGUROS. Se analizan los argumentos esbozados al momento de dar contestación a la demanda, que en resumen corresponden a los siguientes:

LEGALIDAD DE LOS ACTOS DEMANDADOS:

A pesar de los diferentes argumentos enarbolados a lo largo del libelo demandatorio, no logra la parte actora desvirtuar la presunción de legalidad de la cual se encuentran revestidas las resoluciones demandadas de conformidad con el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.

1.1. De la debida motivación de los actos administrativos demandados:

1.1.1 Incumplimiento en el buen manejo y correcta inversión del anticipo.

Al respecto, señala la parte actora que no existió prueba fehaciente que demostrara el incumplimiento del contrato de obra Nro. 031 de 2015 respecto al buen manejo y correcta del anticipo, para lo cual invoca el contenido del dictamen pericial aportado por la Compañía Aseguradora Seguros del Estado S.A. Ahora bien, frente a dicha “experticia” es preciso tener en cuenta que:

- El informe pericial fue elaborado principalmente con base en los soportes contables– *facturas* - allegados por la Unión Temporal Puentes Armenia, así como también en una única visita “técnica” visual al sitio.
- Tuvo en cuenta todos los gastos aportados por la UT Puentes Armenia sin distinguir si los mismos cumplían con el objeto del contrato de obra pública Nro. 031 de 2015 y el plan de inversión del mismo. Es más, se pudo establecer en sede administrativa que el informe en cuestión, incluyó como gastos que demostraban la correcta inversión del anticipo, algunos que estaban relacionados con otros negocios jurídicos, esto es, el contrato de obra 012 de 2015.
- Careció de firmeza, precisión y claridad, toda vez que su importancia ésta en que la misma debe ilustrar y transmitir conocimiento de la técnica, ciencia o arte de lo dicho. Por tanto, al no cumplir con los requisitos mínimos esenciales, pasó de ser tenido en cuenta, actuación ésta surtida al tenor de la Sentencia del 14 de marzo de 2019, proferida por la Sección Tercera – Subsección A del Consejo de Estado, en proceso radicado bajo No. 17001-23-31-000-2012-00233-01 (56559).

1.1.2 El Dolo Comporta un Riesgo Inasegurable:

Alega la parte demandante que en el evento en el que se encuentre acreditada una conducta dolosa o gravemente culposa en cabeza de la unión temporal contratista o de alguna compañía que la conforme, la Compañía Aseguradora no está llamada a responder patrimonialmente.

Empero desconoce que el contrato de obra 031 de 2015 se encuentra regulado por las normas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, es decir, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y decreto único reglamentario N° 1082 de 2015.

Luego entonces el artículo 1055 del Código de Comercio traído a colación como sustento en la demanda, resulta inaplicable al caso bajo estudio, según se desprende de los Artículos “2.2.1.2.3.2.3. *Exclusiones*” y “2.2.1.1.3.2.6. *Inoponibilidad de excepciones de la compañía de seguros*”, del Decreto 1083 de 2015. Sobre este punto, existen criterios de interpretación favorables a la entidad a cargo del Consejo de Estado, verbi gracia, las sentencias dictadas dentro de los procesos con números de radicado 11001 03 26 000 2009 00047 00 (36860) del 14 de junio de 2019 y 52001233100020120018201 (60348) del 13 de agosto de 2020.

1.1.3 La entidad contratante NO incurrió en una violación a las normas en que debe fundarse, concretamente en lo preceptuado en el artículo 1081 del código de comercio – prescripción de las acciones ordinarias derivadas del contrato de seguro.



Esboza la parte demandante que el Municipio *tuvo conocimiento del mal manejo del anticipo a partir del día 01 de noviembre de 2017, por lo tanto, el término bienal para declarar el incumplimiento empezó a correr desde ese día y finalizaba el día 02 de noviembre de 2019, fecha en la que aún no había un fallo que declarara el incumplimiento contractual.*

La anterior apreciación se basa en el hecho de que para el día 01 de noviembre de 2017, el interventor entregó en la secretaria de infraestructura de la Alcaldía de Armenia, el informe de interventoría N° 18 que comprende el periodo de agosto 09 a septiembre 08 de 2017. Visto tal informe con periodo de reporte agosto 09 a septiembre 08 de 2017, se tiene que la interventoría sin mayor elucubración, afirma que: “(...) A la fecha el anticipo fue invertido en su totalidad (...)”. Por tanto, no son de recibo las alegaciones contenidas en la demanda, al respecto.

1.1.4 La entidad contratante NO incurrió en una violación a las normas en que debe fundarse, concretamente en lo preceptuado en el artículo 1060 del código de comercio.

Plasma el extremo activo en su escrito de demanda, que los Actos Administrativos demandados están llamados a ser nulitados en la medida que tanto el contratista – *tomador* – como la entidad de derecho público Municipio de Armenia – *asegurado* -, faltaron al deber de información que les asistía respecto del estado del riesgo visto desde dos momentos: i) Al momento de la expedición de la correspondiente póliza y ii) Durante la ejecución del contrato de obra amparado. Lo anterior, según las disposiciones contenidas en los Artículos 1058 y 1060 del Código de Comercio, respectivamente.

A pesar de tal aseveración, olvida la aseguradora demandante que la declaración del estado del riesgo como deber de información, recae única y exclusivamente en el tomador de la póliza de cumplimiento a favor de entidades estatales, es decir, en el contratista como colaborador del estado.

En lo que corresponde a la ejecución del contrato de obra 031 de 2015, tenemos que cada uno de los modificatorios suscritos, se encuentran soportados legalmente en los principios de buena fe, mutabilidad y conservación del contrato. Además, fueron amparados por las respectivas modificaciones a la póliza única de cumplimiento, sin que ni el contratista ni mucho menos el garante, hubiesen dejado salvedad o realizado objeción alguna. Así pues, no puede la aseguradora a instancias del presenta caso excusarse de la responsabilidad que le asiste en los términos de la sentencia: CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A. Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ. Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil trece (2013). RADICACIÓN: 250002326000200100051 01 (EXPEDIENTE 27.505)

Finalmente, existe un fallo judicial de primera instancia favorable al municipio de armenia proferido por el Tribunal Administrativo del Quindío en el proceso con radicación 63001233300020210003700, en el cual se discutieron similares pretensiones al de caso bajo estudio, en especial de aquella que propenden por la nulidad de la Resolución No. 223 del 27 de agosto del 2020 y la Resolución No. 366 del 22 de diciembre del 2020, a través de las cuales se declaró el incumplimiento imputable al contratista constitutivo de reclamación del siniestro del amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo del contrato de obra 031 de 2015.

En razón de lo expuesto, los miembros del Comité de Conciliación deciden por unanimidad no presentar ánimo conciliatorio.

Armenia, 5 de julio de 2022

DIANA PATRICIA LOAIZA SANCHEZ
Secretaria Técnica